



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2018
ACTOR: MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO
JALPAN, ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek, instructor en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancias	Registro
Copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en el recurso de reclamación 91/2019-CA , derivado de la controversia constitucional 184/2018.	Sin registro
Copia certificada de la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en el recurso de reclamación 98/2019-CA , derivado de la controversia constitucional 184/2018.	Sin registro

Documentos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Agréguese al expediente, para que surtan efectos legales, las copias certificadas de las resoluciones de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los recursos de reclamación **91/2019-CA** y **98/2019-CA**, derivados de la controversia citada al rubro.

Visto que la Primera Sala de este Alto Tribunal en el recurso de reclamación **91/2019-CA**, determinó que eran parcialmente fundados los agravios del Municipio recurrente, determinando lo siguiente:

"(...)lo procedente es declarar fundado el recurso, revocar el acuerdo recurrido para que el Ministro Instructor valore que lo cuestionado en la segunda ampliación de demanda sí modifica la litis de la controversia, cumpliendo los supuestos para ser considerado como un hecho superveniente susceptible de cuestionarse en una ampliación de demanda. Lo que llevará a admitir dicha ampliación salvo que se advierta una diversa razón manifiesta e indudable de improcedencia que no se relacione con lo aquí analizado". [el subrayado es propio]

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo anterior, se **revoca el acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve**, y se realiza un nuevo análisis de la segunda ampliación de la demanda presentada por el Municipio de San Raymundo Jalpan, por lo que se acuerda lo siguiente:

Por medio del escrito presentado ante este Alto Tribunal el seis de febrero de dos mil diecinueve, el Síndico del **Municipio de San Raymundo Jalpan, Estado de Oaxaca**, presentó la ampliación a la demanda de controversia constitucional, en contra de los siguientes actos:

"De la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, demandó:

a).- La real y eminente retención de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados al Municipio actor y que se ministren por conducto de la Secretaría de Finanzas al Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, **a partir de la primera y segunda quincena del mes de enero de 2019, correspondiente del 01 al 15 de enero**

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2018

de 2019 y del 16 al 30 de enero de 2019, así como las que se acumulen hasta el dictado de la sentencia en el presente asunto.

b).- El pago de los intereses generados con motivo de las ilegales retenciones de los recursos que corresponden al Municipio que represento y que se especifican en el inciso a) que antecede.”.

Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la Primera Sala de este Alto Tribunal, el hecho de que el Municipio actor impugne la retención de las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de enero de dos mil diecinueve, así como las que se acumulen hasta el dictado de la sentencia en el presente asunto, si bien, debe considerarse como hecho superviniente por haber acontecido con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, de la revisión del escrito de la segunda ampliación, **se advierte una diversa razón manifiesta e indudable de improcedencia**, por lo que se arriba a la conclusión de que procede **desecharla**, atento a las consideraciones que se desarrollan a continuación.

Conforme a lo establecido en el artículo 25¹ de la Ley Reglamentaria de la materia, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano un medio de control de constitucionalidad, como el que ahora se analiza, si advierte que en él se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se cita a continuación:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por “manifiesto” debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo “indudable” resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.”²

En relación con lo anterior, de la lectura de las constancias que obran en autos, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI³, de la Ley Reglamentaria de la materia, relativa a la falta de **definitividad**.

Al respecto, resulta pertinente precisar que el municipio actor señala en el escrito de ampliación de demanda como actos impugnados la retención de los recursos federales, en específico de:

¹ Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

² Tesis P./J. 128/2001. Jurisprudencia. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV. Correspondiente al mes de octubre de dos mil uno. Página ochocientos tres. Número de registro 188643.

³ Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...).



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

a). La retención de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales correspondientes a los ramos 28 y 33, fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados al Municipio actor, **a partir de la primera y segunda quincena del mes de enero de 2019, así como las que se acumulen hasta el dictado de la sentencia en el presente asunto.**

b). **El pago de los intereses generados con motivo de las retenciones** de los recursos que corresponden al Municipio actor.

Ahora, es dable destacar que las violaciones alegadas por el Municipio actor, consistentes en que los recursos de origen federal que le corresponden no han sido integrados a la hacienda municipal, las hace depender de la transgresión directa de ordenamientos distintos a la Constitución General, como son la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.

En ese tenor, si bien el actor pretende que vía controversia constitucional se estudie la posible vulneración a las obligaciones del Ejecutivo Local de entregar a los municipios de la entidad las diferencias de las liquidaciones de participaciones y recursos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve que la Federación les proporciona, lo cierto es que dichas violaciones las hace descansar de manera preponderante, en la interpretación y aplicación de disposiciones ordinarias federales y locales.

Por lo anterior, debido a que el promovente encuadra los actos reclamados en violaciones respecto de diversas facultades previstas en la Ley de Coordinación Fiscal, por tanto, para reclamar la omisión o negativa del Poder Ejecutivo de Oaxaca de entregar los recursos adeudados, **debió agotar la vía legalmente prevista en el referido ordenamiento legal**, para obtener la revocación o modificación del acto o norma que presuntamente le causa una afectación a su competencia, facultades y atribuciones constitucionalmente previstas.

En esa tesitura, la Constitución Federal reconoce a los municipios y a sus ayuntamientos, como órganos de gobierno, la facultad para administrar libremente su hacienda, la que se conforma de los recursos federales, los cuales se entregarán según lo establecido en las legislaciones correspondientes.

Ahora bien, una de las normativas aplicables es justamente la Ley de Coordinación Fiscal. Este ordenamiento, según lo previsto en su artículo 1⁴ tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios, para establecer la participación correspondiente a sus haciendas públicas y su distribución.

⁴ Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2018

En ese orden de ideas, el artículo 6, párrafo segundo⁵, de dicho ordenamiento señala que la Federación entregará los recursos a los municipios por conducto de las entidades federativas; siendo que el retraso produce el pago de intereses y, en caso de incumplimiento por parte de los estados, la Federación hará entrega directa a los municipios, para lo cual descontará la participación del monto correspondiente al Estado.

Como se advierte, la Federación al ser la que entrega los recursos a los estados, a fin de que éstos los entreguen por su conducto a los municipios, según corresponda, funge como un órgano de control respecto de su adecuada administración y destino.

Esa atribución corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 8⁶ de la Ley de Coordinación Fiscal, pues dicha dependencia debe informar sobre el comportamiento de los recursos federales a las partes beneficiadas.

Asimismo, con fundamento en el artículo 117⁷ de la Ley de Coordinación Fiscal, la citada Secretaría está facultada para disminuir los recursos de las entidades, cuando éstas violen lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX, o 118, fracción I, de la Constitución Federal, o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese caso, la mencionada dependencia debe oír a la entidad y deberá atender el dictamen técnico de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Cuando la disminución de recursos suceda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe comunicar la resolución a la entidad respectiva, en la cual señalará la violación cometida.

Un elemento adicional para evidenciar la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del control sobre el destino de los recursos, es la posibilidad de esa dependencia para vigilar, por conducto de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, la determinación, liquidación y pago de éstos a los municipios⁸. En ese mismo sentido, el Reglamento Interior de los

⁵ **Artículo 6.** (...) La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. (...)

⁶ **Artículo 8.** Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y la Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos fiscales derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales.

La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas.

⁷ **Artículo 11.** Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal viole lo previsto por los artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 118 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en contravención a dichas disposiciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate, señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo de tres meses. Si la entidad no efectuara la corrección se considerará que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después de su publicación.

Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año.

⁸ **Artículo 21.** Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: (...)

IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2018

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, establece la facultad de la citada Comisión para tomar las medidas necesarias para el ejercicio de la mencionada facultad⁹.

Así, si los municipios se consideran afectados por la falta de entrega de los recursos por parte de los estados, entonces pueden hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta requiera a la entidad federativa. En caso de que la dependencia considere injustificada la omisión, puede entregar directamente los recursos a los municipios y, en su caso, descontar de la próxima ministración a los estados, respecto de aquellos dejados de entregar, para ser proporcionados a los municipios.

De todo lo descrito, válidamente se puede concluir que la Ley de Coordinación Fiscal establece una autoridad a la cual deben acudir los municipios, a fin de que puedan reclamar el incumplimiento por parte de las entidades federativas, de entregar oportunamente las participaciones y aportaciones a las que tienen derecho.

Ahora bien, en el caso concreto, el municipio actor amplía la demanda con la finalidad de impugnar la retención de recursos federales respecto al mes de enero de dos mil diecinueve, correspondientes a los ramos 28 y 33, fondo III y IV, así como los intereses que se generen con motivo de las retenciones.

Al respecto, en modo alguno se advierte que el Municipio actor haya informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que no ha recibido los recursos reclamados.

De ahí también la improcedencia de la segunda ampliación de demanda, pues el Municipio actor no agotó la vía legalmente prevista para reparar la vulneración al derecho de integrar los recursos de origen federal a su hacienda municipal, el cual estima violado.

Por todo lo expuesto, la presente demanda debe desecharse de plano, por actualizarse los supuestos de improcedencia contenidos en el artículo 19, fracción VI¹⁰, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Federal.

Por las razones expuestas, se

participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades. (...)

⁹ Reglamento Interior de los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Artículo 23. La Comisión Permanente tendrá en sus atribuciones: (...)

V. Tomar las medidas necesarias para el ejercicio de la facultad de vigilancia en la creación, incremento y distribución de los fondos de participaciones, y sobre el pago que cada una de las Entidades efectúe a sus correspondientes municipios. (...)

¹⁰ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...);

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; (...)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 184/2018

ACUERDA

PRIMERO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, de la ampliación demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Municipio de San Raymundo Jalpan, Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior; se tiene al promovente señalando los estrados para oír y recibir notificaciones.

TERCERO. Una vez que cause estado este auto, se reserva señalar fecha de audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

Notifíquese. Por lista y por estrados al Municipio actor, por oficio a las demás partes.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

